Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a **trece de marzo de dos mil veinticuatro**.

**Visto** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **05369/INFOEM/IP/RR/2023**, por interpuesto por **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX**, en lo sucesivo **la parte Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte del **Ayuntamiento de Toluca,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **once** **de agosto del dos mil veintitrés,** **la parte Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **02760/TOLUCA/IP/2023,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Solicito el Acta de Instalación del Comité de Ética del Ayuntamiento de Toluca, así como el acta en donde se advierta el plan de trabajo que se realizará dicho comité de la administración 2022-2024, a su vez, se solicita remitir los salarios y recibos de nómina que perciben los miembros del Cabildo Municipal y si estos reciben estímulos, dietas, compensaciones o alguna otra remuneración que perciban con motivo de su cargo.” (Sic)*

**Modalidad de Entrega:** A través de **SAIMEX**.

**2. Respuesta.** El **primero de septiembre de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** remitió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*En atención a la solicitud con folio 02760/TOLUCA/IP/2023, me permito adjuntar al presente la respuesta correspondiente y anexos. Sin más por el momento, reciba un saludo.*

*ATENTAMENTE*

*Lic. Norma Sofía Pérez Martínez “(Sic)*

**Archivos adjuntos:**

***“tol-pdf-gmsem-2224-v23-a2.pdf”:*** Gaceta Municipal Semanal del Ayuntamiento de Toluca 2022-2024, en la que se visualiza el Código de Ética que emite la Contraloría Municipal.

******

 ***“saimex 02760.zip”:*** Carpeta comprimida en la que se aprecian los recibos de nómina y salarios quincenales de los integrantes del cabildo de Toluca.



***“Respuesta 2760.pdf”:*** Oficio de dos hojas en el que la Titular de la Unidad de Transparencia señala que la Dirección General de Administración, remite los salarios y recibos de nómina de los integrantes del cabildo en versión pública.

Asimismo refiere que la Contraloría Municipal refirió que lo solicitado se encuentra en la siguiente liga electrónica: <https://www2.toluca.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/tol-pdf-gmsem-2224-v23-a2.pdf> , la cual conduce a la Gaceta Municipal Semanal del Ayuntamiento de Toluca 2022-2024, en la que se visualiza el Código de Ética que emite la Contraloría Municipal, asimismo refiere que en aras de garantizar el derecho de acceso a la información del particular, remite el archivo para su consulta.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **cuatro de septiembre de dos mil veintitrés,** **la parte Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**a) Acto impugnado:**

*“Falta información.” (Sic)*

**b) Razones o motivos de inconformidad**:

 *“****No se adjunto el acta donde se advierta el plan de trabajo que realizará el Comité de Ética, administración 2022-2024****. Únicamente se adjunto el punto del acuerdo del Cabildo donde se instaló dicho Comité.* ***Por lo cual, la información se encuentra incompleta, solicito que se envíe el acta donde se advierta el plan de trabajo que realizará el Comité de Ética (completa)****.” (Sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la **Comisionada** **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizará sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de Revisión.** El **siete de septiembre de dos mil veintitrés,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. De las constancias que obran en el expediente electrónico, se tiene que el **Sujeto Obligado** remitió el archivo denominado “***RR5369.pdf”,*** el cual se compone de dieciocho fojas, en el cual medularmente ratifica los términos de la respuesta inicial, señalando que se remitió la información con la que se cuenta.

Posteriormente el **veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** remitió el archivo electrónico denominado “***Alcance 5369.pdf”,*** mediante el cual señala que respecto al Plan de Trabajo del Comité de Ética, **la Contraloría señala que no tiene la obligación de contar con dicho documento, en razón de que no existe marco jurídico que obligue a esta unidad administrativa a contar con el mismo, de tal manera que no se generó, poseyó y/o administró dicha información.**

Una vez analizada esta documentación, se procedió a ponerla a disposición de la parte Recurrente mediante acuerdos signados por la Comisionada Ponente, los días **veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro y cinco de marzo de dos mil veinticuatro**, mientras que por cuanto hace a **la parte Recurrente**, se tiene que fue omisa en pronunciarse, por lo que se tiene por precluido su derecho para tal efecto.



**7.** **Ampliación del término para resolver**. El **veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro**, con fundamento en el artículo 181, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se acordó la ampliación del plazo para su resolución.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado.** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso**: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

 *“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso de plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**8.** **Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, con fecha **once de marzo de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión.** Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Al respecto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece lo siguiente:

***“Artículo 178.*** *El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.*

Del precepto legal transcrito, se desprende que cuando los solicitantes de información en el ejercicio del derecho de acceso a la información no se encuentren satisfechos con la información entregada por los sujetos obligados, podrán interponer recurso de revisión de manera directa o por medios electrónicos dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, y, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **primero de septiembre de dos mil veintitrés,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por **la parte Recurrente**, se tuvo por presentado el día **cuatro de septiembre de dos mil veintitrés**; esto es, al **segundo día hábil siguiente** en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada.

En este sentido, al considerar la fecha en que se formuló la solicitud y la fecha en que respondió a esta el **Sujeto Obligado**; así como la fecha en que se interpuso el recurso de revisión, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos las disposiciones legales referidas.

Así también, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis de los formatos de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Ahora bien, resulta procedente la interposición del recurso, según lo aducido por la parte recurrente en sus razones o motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; que a la letra dice:

***“Artículo 179****.* ***El recurso de revisión*** *es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública****, y procederá en contra de las siguientes causas****:*

*…*

***V. La entrega de información incompleta****;” (Énfasis añadido)*

**Tercero. Análisis de las causas de sobreseimiento del recurso de revisión.** En primera instancia, debe apuntarse que del análisis al recurso de revisión que ahora se resuelve, se tiene que se actualiza la causal de sobreseimiento del recurso de revisión establecido en la fracción III del artículo 192[[1]](#footnote-1) en relación con el diverso 186 fracción I[[2]](#footnote-2), ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, derivado del contenido del alcance al informe justificado rendido por el **Sujeto Obligado.**

Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias que obran en el expediente electrónico, valoradas anteriormente, destacan por su importancia los antecedentes siguientes:

En la solicitud de información materia del presente recurso, la parte solicitante requirió al **Sujeto Obligado** lo siguiente:

* **El Acta de Instalación del Comité de Ética del Ayuntamiento de Toluca.**
* **El acta en donde se advierta el plan de trabajo que se realizará dicho comité de la administración 2022-2024.**
* **Los salarios y recibos de nómina que perciben los miembros del Cabildo Municipal y si estos reciben estímulos, dietas, compensaciones o alguna otra remuneración que perciban con motivo de su cargo.**

En respuesta, el **Sujeto Obligado** remitió:

* La Gaceta Municipal Semanal del Ayuntamiento de Toluca 2022-2024, en la que se visualiza el Código de Ética que emite la Contraloría Municipal.
* Carpeta comprimida en la que se aprecian los recibos de nómina y salarios quincenales de los integrantes del cabildo de Toluca.

Una vez notificada la respuesta, la persona solicitante interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, en el cual señaló como motivo de inconformidad: *“****No se adjunto el acta donde se advierta el plan de trabajo que realizará el Comité de Ética, administración 2022-2024…Por lo cual, la información se encuentra incompleta, solicito que se envíe el acta donde se advierta el plan de trabajo que realizará el Comité de Ética (completa).****” (Sic)*

Posteriormente en la etapa de informe justificado, el **Sujeto Obligado** ratificó los términos de la respuesta vertida inicialmente, no obstante mediante el alcance al informe justificado, precisó que respecto al Plan de Trabajo del Comité de Ética, la Contraloría señala que no tiene la obligación de contar con dicho documento, en razón de que no existe marco jurídico que obligue a esta unidad administrativa a contar con el mismo, de tal manera que no se generó, poseyó y/o administró dicha información, mientras que la **parte Recurrente** fue omisa en pronunciarse, por lo tanto, se procede a emitir la resolución que conforme a derecho corresponde.

Bajo este orden de ideas, previo análisis del caso, es de advertirse que **los** motivos de inconformidad de la parte recurrente **versan estrictamente sobre el acta en donde se advierta el plan de trabajo que se realizará el comité de ética de la administración 2022-2024.**

Bajo este orden de ideas, la parte de la información entregada y que no fue impugnada debe declararse consentida, esto es **lo relativo al acta de Instalación del Comité de Ética del Ayuntamiento de Toluca y los salarios y recibos de nómina que perciben los miembros del Cabildo Municipal y si estos reciben estímulos, dietas, compensaciones o alguna otra remuneración**, toda vez que, al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que, en el caso concreto se infiere que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, satisface parte de la solicitud presentada.

Lo anterior es así, debido a que cuando un **Recurrente** impugna la información entregada por el **Sujeto Obligado**, y este no expresa Razón o Motivo de Inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que **la parte Recurrente** está conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Consecuentemente, se reitera que la parte de la solicitud que no fue impugnada debe declararse consentida por **la parte Recurrente**, en razón de que no se realizaron manifestaciones de inconformidad, por lo que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere un consentimiento de **la parte Recurrente** ante la falta de impugnación eficaz.

Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

Ahora bien, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública que asiste a **la parte** **Recurrente**, resulta conveniente señalar que el presente análisis versará respecto de la falta de entrega de **información relativa al acta en donde se advierta el plan de trabajo que se realizará el comité de ética de la administración 2022-2024.**

Establecido lo anterior, este Instituto advirtió que para otorgar respuesta a la solicitud inicial, se le turnó este requerimiento al Titular de la Contraloría Municipal, quien únicamente adjuntó el adjuntó el código de ética, pero **fue omiso en pronunciarse puntualmente en la respuesta respecto del plan de trabajo del comité de ética**, por ende, al no pronunciarse en estricto sentido sobre este punto, se atiende que la respuesta no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales de acuerdo con el Criterio 02/2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se establece que:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

No obstante lo anterior, en una etapa posterior, es decir, mediante alcance al informe justificado, el **Sujeto Obligado** por conducto de la Contraloría Municipal, señala que **no tiene la obligación de contar con el Plan de Trabajo del Comité de Ética, en razón de que no existe marco jurídico que obligue a esta unidad administrativa a contar con el mismo, de tal manera que no se generó, poseyó y/o administró dicha información.**

En esta consecución de ideas, este Organismo Garante procedió a consultar lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento legal que establece en su artículo 16 que **los servidores públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control**, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad.

Correlativo a lo anterior el Acuerdo por el que se dan a Conocer los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se Refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018, establece en su artículo décimo segundo dispone lo siguiente:

*“TERCERO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:*

*…*

***IV. Órganos Internos de Control: Órganos Internos de Control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno****, de conformidad con el artículo 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 3, fracción X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

*CAPÍTULO IV*

*DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA*

*DÉCIMO SEGUNDO. Como órganos encargados de fomentar y vigilar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta,* ***los entes públicos podrán integrar Comités de Ética o figuras análogas, para lo cual las Secretarías y los Órganos Internos de Control regularán su integración, organización, atribuciones y funcionamiento.”***

En armonía con lo anteriormente citado, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado De México y Municipios, mandata en su artículo 17 segundo párrafo que los **servidores públicos deberán observar el código de ética o disposiciones relativas que al efecto sea emitido**, conforme a los lineamientos que emita la Ley, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

Asimismo, que el código de ética y las disposiciones relativas que emitan los municipios, los órganos constitucionales autónomos, deberán hacerse del conocimiento de sus servidores públicos, así como darle la máxima publicidad.

Por lo anteriormente analizado, se abordan a las siguientes conclusiones:

1. El artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas delega a los órganos internos de control, la atribución de generar el código de ética, mismo que deberá ser observado por los servidores públicos en estricto sentido.
2. Posteriormente, el Acuerdo por el que se dan a Conocer los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se Refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018, establece en su artículo décimo segundo que los órganos internos de control de los entes públicos, siendo estos, los de los tres órdenes de gobierno, es decir, los del orden federal, estatal y municipal **podrán integrar el comité de ética o figura análoga, delegándole al órgano interno la facultad de regular su integración, organización, atribuciones y funcionamiento.**

**Por consiguiente, debemos entender y tener en claro que esta facultad de integrar el comité de ética para los órganos internos de control es de carácter potestativa no obligatoria, por lo tanto, puede ejercerse o no, asimismo al depender de estos la integración, organización, atribuciones y funcionamiento, cabe la posibilidad de que determinen a su consideración los lineamientos a seguir,** por ende, si en el caso particular, el **Sujeto Obligado** manifestó en alcance al informe justificado que no tiene la obligación de contar con el Plan de Trabajo del Comité de Ética, en razón de que no existe marco jurídico que obligue a esta unidad administrativa a contar con el mismo, de tal manera que no se generó, poseyó y/o administró dicha información, dicha manifestación es válida para tener por atendido el requerimiento de información pues **se reitera, la integración del comité de ética en primera instancia es una facultad potestativa** y además depende del órgano interno de control lo relativo a las atribuciones y funcionamiento, en consecuencia, si este señala que no existe una fuente obligacional que concretamente lo constriña a generar el plan de trabajo del comité de ética solicitado, podemos concluir que este no obra en sus archivos, por lo tanto, no se puede atender el requerimiento de información.

En consecuencia, de todo lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 192 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que dispone lo siguiente:

***“Artículo 192.*** *El recurso será sobreseído en todo o en parte cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:*

***…***

***III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia…”*** *(Énfasis añadido)*

De lo establecido en el precepto legal citado se advierte que el sobreseimiento del recurso de revisión procede en los siguientes casos:

a) Cuando el sujeto obligado modifique el acto impugnado.

b) Cuando el sujeto obligado revoque el acto impugnado.

Quedando en ambos casos el acto combatido sin materia o sin efectos.

Como se observa de lo anterior, un acto impugnado es modificado en aquellos casos en los que el **Sujeto Obligado** después de haber otorgado una respuesta, emite una diversa de manera posterior y en esta subsana las deficiencias que hubiera tenido, quedando satisfecho el derecho subjetivo accionado por **la parte** **Recurrente**.

Por lo que hace a la revocación, esta se actualiza cuando el **Sujeto Obligado** deja sin efectos la primera respuesta y en su lugar emite otra con las características y cualidades suficientes para dejar satisfecho el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.

En ese tenor, un acto impugnado queda sin efectos, cuando aun existiendo jurídicamente (esto es, que no se ha modificado, ni revocado) ya no genera ninguna consecuencia legal.

En tanto, en el presente caso queda sin materia, toda vez que con el alcance al Informe Justificado, el **Sujeto Obligado** modificó la respuesta **al señalar que no tiene la obligación de contar con el Plan de Trabajo del Comité de Ética, en razón de que no existe marco jurídico que obligue a esta unidad administrativa a contar con el mismo, de tal manera que no se generó, poseyó y/o administró dicha información,** por lo que tomando en consideración dicha circunstancia, así como el hecho de que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado** fue puesta a la vista de la parte **Recurrente** con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que obre constancia en el expediente electrónico de que dicho derecho se hiciera valer, debe entenderse que ha quedado satisfecha la solicitud planteada, quedando sin materia el presente recurso de revisión, consecuentemente se actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 192 de la Ley de la Materia vigente en la Entidad, antes transcrita.

En resumen, el **Sujeto Obligado** dio respuesta completa a la solicitud de acceso a la información pública de **la ahora parte** **Recurrente**; aunque ello haya sido de manera posterior a su respuesta inicial; dejando con ello sin materia el presente recurso de revisión, actualizándose entonces la causal prevista en la fracción III del artículo 192 de la Ley de la Materia vigente en la Entidad, antes transcrita.

Siendo el *sobreseimiento* un acto que da por terminado el procedimiento administrativo de impugnación sin resolver el fondo de la cuestión planteada, por presentarse causas que impiden a la autoridad referirse a lo sustancial de lo planteado por **la parte** **Recurrente**, los efectos del sobreseimiento son los dar por concluido el recurso administrativo sin entrar al estudio de fondo del asunto de que se trate; lo anterior con apoyo en el criterio del Poder Judicial de la Federación con rubro:

*“****SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO***

*Localización: 213609. II.2o.183 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Febrero de 1994, Pág. 420*

*Cuerpo de tesis: No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.”*

Cabe destacar que la decisión de este órgano colegiado de sobreseer el recurso de revisión no implica una limitación o negación a la justicia, según lo ha establecido el Poder Judicial Federal, en el criterio que es aplicable por analogía, con rubro:

 *“****DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA****”*

*Cuerpo de la tesis: Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.”*

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

1. **R E S U E L V E:**

**Primero.** Se **SOBRESEE** el recurso de revisión **05369/INFOEM/IP/RR/2023,** porque al **modificar la respuesta** se actualizó la causal prevista en el artículo 192, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, quedando sin materia en términos del **Considerando Tercero** de la presente Resolución.

**Segundo. Notifíquese vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense** (**SAIMEX)*,*** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** la presente resolución, para su conocimiento.

**Tercero. Notifíquese, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX),** la presente resolución a **la parte Recurrente**, así como que podrá impugnarla vía **Juicio de Amparo** en los términos de las leyes aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. **Artículo 192.** El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

…

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia; [↑](#footnote-ref-1)
2. **Artículo 186**. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar o sobreseer el recurso; [↑](#footnote-ref-2)